

El riesgo de la bancarrota

INFLACION: casi un record mundial; desempleo: hacia el millón de parados; balanza de pagos: déficit mayor del previsto; actividad productiva: sin animación; inversiones: ni un duro; confianza: muy poca. En un resumen apresurado estos serían los síntomas más evidentes de la grave situación que en estos momentos existe en España. Pero también podrían servir de balance de un año aciago.

En términos parecidos, con un menor grado de intensidad y con una dosis interesada de esperanza, se expresaba Juan Miguel Villar Mir, nuevo ministro de Hacienda del primer Gobierno de la Monarquía, el 29 de diciembre ante las Cortes españolas, en su primer discurso oficial: la inflación, el paro, el déficit exterior, la reducción de las inversiones fueron denunciados con un realismo relativo, pero, desde luego, inhabitual desde el Gobierno. La crisis económica, a los pocos días de la muerte de Franco, adquiría carta de naturaleza entre los problemas fundamentales del país: eso ya era un paso.

Menos positivo fue el camino propuesto para salir de ella; porque Villar Mir no fue capaz de arbitrar un esquema de medidas coherentes con la realidad política y económica del país. La reactivación sectorial que propuso y que trató tímidamente de llevar a cabo, antes de que las Cortes paralizaran su plan de actuación económica urgente, no se produjo. El control de la evolución de la masa monetaria con fines estabilizadores y antiinflacionistas que practicó en los ocho meses de su mandato ni equilibró ni evitó que la inflación creciera a un ritmo anual del 20 por 100. La devaluación de la peseta, medida que como todo el mundo insiste produce frutos a medio plazo, pero que fue concebida para obtener resultados económicos y políticos a corto, no evitó un agravamiento del déficit exterior. Y la congelación salarial, la clave de su lucha antiinflacionista, no hizo sino provocar una reacción de los medios laborales que en buena medida cambió el signo de la evolución política perseguida por el Gobierno Arias-Fraga.

Para colmo, la levisísima recuperación del ritmo económico que empezó a hacerse ostensible en los últimos meses de 1975 y que prosiguió en el primer cuatrimestre de este año, desapareció con los primeros calores del verano: a España le había llegado con unos meses de retraso, entre otras cosas porque

se estaba mucho más en el fondo, el pasajero cambio de coyuntura de las economías mundiales, y el empeoramiento aquí se inició también con algunos meses de adelanto; desde el mes de julio, todos los índices de actividad industrial empezaron a empeorar. Cabe decir que la recuperación de los primeros meses del año ni siquiera había permitido alcanzar los niveles de actividad de los primeros de 1974, una vez ya iniciado el descenso del ritmo.

El ministro de Industria, Carlos Pérez de Bricio, constataba en marzo que se percibía un cambio de coyuntura: que la inversión industrial, que había descendido en nueve puntos en 1975, iniciaba una ligera recuperación. Paralelamente, se constataba una disminu-



Villar Mir: error sobre error.

ción de los "stocks" industriales, tendencia que iba a proseguir hasta el verano, que denotaba un ligero aumento de la demanda: estos aumentos iban a ser servidos precisamente con cargo a las mercancías acumuladas y no con aumentos sustanciales de la producción.

El año había nacido, por tanto, con limitadísimas esperanzas de un lado, pero con una previsión de enormes tensiones de otro: una nueva situación política azuzada, por lo que casi podría considerarse una declaración de guerra a los trabajadores, iba a dar paso a un fenomenal movimiento huelguístico, cuya consecuencia menos significativa, en una coyuntura como la que existía en aquellos momentos, iba a ser la reducción de la producción que iba a traer consigo. Porque lo más importante sería la demostración de que medidas antiinflacionistas tradicionales no eran válidas en la situación sociopolítica española de 1976. La lección fue contundente.

Un tercer elemento iba a añadirse para dificultar aún más los movimientos de un Gobierno que creía poder resolver sólo la situación económica: la reacción del franquismo tradicional sentado en los bancos de las Cortes, que iban a paralizar el plan de actuación propuesto por Villar. Una paralización cuya importancia radicaba en lo significativo del enfrentamiento y no en el hecho de que frenara un programa salvador. En poco habría cambiado la situación el plan de Villar Mir en caso de que hubiera sido aprobado. Como meses más tarde, poco antes del fin del Gobierno Arias, el propio Villar declararía, contradiciendo sus palabras de meses antes, el plan contenía fundamentalmente medidas a medio plazo.

Los 1.000 millones de dólares que el Eximbank concedió a España tras el viaje del ministro de Hacienda a los Estados Unidos, junto con otros 1.800 prestados por un consorcio financiero de varios Bancos, fueron el canto de cisne del Gobierno Arias en el terreno económico. Cuando ya la coyuntura mundial, tras una recuperación no superior a nueve meses, se había apagado, en líneas generales; cuando los índices de desconfianza empresarial estaban nuevamente llegando al fondo (y la bajada de la Bolsa había vuelto a ser la tónica del mercado de valores), esa inyección de dólares, el único instrumento que podía manejar el Go-

bierno a costa de cesiones aún no valoradas, abría un camino de esperanza... para el Gobierno.

Pero las cosas ya habían llegado a un límite intolerable: el déficit exterior, a pesar de una recuperación de las exportaciones —forzadas con medios artificiales, casi rompiendo la baraja de las reglas del comercio internacional, y constituyendo en muchos casos una salida coyuntural, incluso a precios no rentables, para unas empresas que no encontraban mercado en el interior—, se anotaba mensualmente niveles superiores a los 50.000 millones de pesetas. El paro no dejaba de crecer —desde los primeros meses del año había superado la cota de los 700.000 trabajadores—, la inflación seguía su ritmo del 20 por ciento anual. El sector público, aquejado de una importante debilidad en sus ingresos y de una necesidad imperiosa de hacer frente a numerosos gastos para tratar de tapar los huecos más evidentes del descenso de actividad, alcanzaba los 100.000 millones de pesetas de déficit. Con esos 2.800 millones de dólares, el endeudamiento exterior alcanzaba, por lo menos —la falta de control y el secreto hace que estas cifras nunca hayan sido conocidas del todo—, la cifra de 12.000 millones de dólares; y eso porque de alguna manera se encontraban menores posibilidades de obtener préstamos en el extranjero que en 1975 y había que echar mano de las reservas del Banco de España para financiar el déficit de la balanza de pagos.

Tras ocho meses de gestión de Villar Mir, la situación económica no sólo no había mejorado, sino que era mucho peor. Y la confianza empresarial, que sigue siendo uno de los elementos clave de una posible salida, seguía a sus niveles más bajos. Se dice que el aumento del 4,58 por 100 del coste de la vida en el mes de mayo fue una de las causas que precipitó el fin de Arias. Se dice también que la reacción de los banqueros ante las contrapartidas cedidas por Villar Mir para la obtención de los créditos en materia de autorizaciones a instalación de Bancos extranjeros en España, ayudó a la caída. Son, desde luego, algunas de las causas. Pero la incapacidad ante la crisis económica contó por vez primera en los últimos cuarenta años a la hora de un cambio de Gobierno.

El equipo Suárez tardó mucho en enfrentarse a la situación económica. Meras declaraciones de principios, muy generales la ma-



El nuevo gobernador del Banco de España, López de Letona, y el ministro de Hacienda, Eduardo Carriles: una polémica significativa.

yoría de las veces, acompañaron en los dos primeros meses de su gestión al agravamiento de la crisis, denotado por todos los índices y la mayoría de los observadores. Para colmo, un nuevo elemento en el que tradicionalmente se confiaba iba a hacer su acto de aparición negativa: el turismo iba a recaudar menos divisas que en años anteriores. Causas políticas —las reacciones a las ejecuciones de septiembre se hicieron notar en un sector cuyo plazo de contratación para el verano finaliza en marzo— y la crisis económica internacional explican esta recesión en el argumento salvador.

Días antes de que el Gobierno Suárez abordara su plan de actuación económica se producían dos hechos importantes: de un lado, la subida de la gasolina y de determinados impuestos de lujo, como medidas destinadas a salvar al Tesoro público de la bancarrota a costa de un empujón a la inflación, y de otro, la constatación de que las recuperaciones mínimas que se habían producido en algunos sectores en los primeros meses del año se debían a un fortalecimiento del consumo: la industria de bienes de consumo era la única que se libraba del desastre, frente a lo que ocurría en las de bienes intermedios y las de inversión. No faltó quien señalara en este sentido el efecto paradójicamente positivo de las huelgas de enero y febrero, ya que al provocar aumentos salariales —cuyo ritmo después del verano se había contraído sensiblemente— habían permitido mantener la demanda en ese terreno.

Pero el Gobierno no lo comprendió o no lo quiso comprender así: y el 8 de octubre volvía a incurrir en el mismo error que Villar: congelar los salarios o al menos tratar de hacerlo (los datos de los convenios pactados desde esa fecha indican

concesiones salariales por parte de las empresas superiores a los techos legalmente permitidos). Y acompañando a esta medida los tradicionales controles para los precios de determinados productos, siguiendo el método instaurado por Barrera de Iríto, que ha sido en realidad una palanca para el crecimiento de dichos precios: distintos estudios han demostrado que han sido precisamente los precios controlados los que más han subido. Lo ocurrido tras el 8 de octubre con los precios de los automóviles no es sino una prueba fehaciente de la capacidad de presión de los grupos oligopólicos para hacer subir los precios de sus productos, estén controlados o no.

La política monetaria, dirigida por Villar Mir hacia una contención de la expansión crediticia que no dejó de provocar protestas por parte de banqueros y empresarios, ha sido y continúa siendo polémica en el nuevo Gobierno. El tema no fue tratado en las medidas del 8 de octubre, pero días después saltó a la actualidad: se habló de un enfrentamiento entre el nuevo ministro de Hacienda, Eduardo Carriles, y el nuevo gobernador del Banco de España, José María López de Letona: el primero, se decía y se dice, se siente atraído por las restricciones crediticias; el segundo, por una política expansiva en este terreno. El respiro concedido, seguramente a instancias de este último, para los tres últimos meses del año ha sido bien recibido en los medios bancarios aun cuando haya sido criticado por su exigüidad. Y de cara a los próximos meses, el tema puede ser importante en el comportamiento empresarial y de la Banca. La polémica Carriles-López de Letona no sería más que un reflejo de las presiones que en este sentido hacen esos sectores. Ello con la amenaza de la espada de

Damocles de la inflación que toda expansión crediticia genera.

Se diría que la gestión económica del segundo Gobierno de la Monarquía está calcada de la del anterior, y que el análisis de la evolución de las magnitudes económicas es idéntico en esquema y agravado en las cifras. En buena medida, ello es cierto: un solo elemento diferencial habría que añadir, desde una óptica interna. Se trata del hecho de que cada vez se comprende con mayor claridad que de la crisis sólo se sale con el consenso de todo el país, de todos sus sectores sociales, de todas sus fuerzas políticas. Las declaraciones de la oposición y de personalidades económicas próximas a las esferas gubernamentales se han sucedido en este sentido en las últimas semanas. Un ministro del Gobierno, Liadó Fernández Urutia, ha pedido recientemente a los partidos de la oposición que planteen y den a conocer sus programas económicos. ¿Es compartido este interés por todo el Gobierno? Actuaciones de otra índole y también recientes indican escasos deseos de proceder a un diálogo y a unos acuerdos profundos sin los cuales —y el consenso que al respecto existe repetimos que marca la diferencia con la época Villar— va a ser imposible salir de la crisis.

La marcha de la economía internacional no hace sino agravar las perspectivas para el próximo año 1977. La recuperación ha perdido su ritmo, y los controles se imponen en la mayoría de los países occidentales: la constatación de que la economía capitalista tiene aún crisis para rato, con vaivenes más o menos prolongados, hace concebir pocas esperanzas para España, país en el que esa crisis generalizada ha puesto al desnudo problemas específicos de una gravedad aún no suficientemente valorada.

El aumento, contradictorio pero innegable a fin de cuentas, de los precios del petróleo en una cuantía muy próxima a la propuesta de Arabia Saudita, aumentará el descontento y, de paso, hará crecer en más de 20.000 millones de pesetas nuestras importaciones en 1977.

Ha llegado la hora de la economía, venía a decir "El País" la pasada semana, poco antes de que otros acontecimientos volvieran a dar un protagonismo a la política. Ha llegado la hora de la economía, porque España mal va a poder aguantar otro año como este de 1976. Los más optimistas prevén para 1977 un crecimiento del PIB próximo al 3 por 100 (en 1976 habrá crecido alrededor del 2). Y ello si se consigue articular una política económica racional y que cuente con un consenso popular. Pero con ese 3 por 100 no sólo no se habrá conseguido disminuir la tasa de paro (que podría muy bien situarse al nivel de 800.000 personas a finales de año), sino que no se conseguirán absorber para la producción las más de 150.000 personas que anualmente engrosan la población activa. Ni tampoco se habrá conseguido reducir sustancialmente los niveles de inflación (que en términos de coste de la vida seguirán siendo superiores al 15 por 100 anual, según los más optimistas). Ni tampoco se habrá frenado la sangría del sector exterior (las importaciones seguirán aumentando —aunque sólo sea por la elevación de los precios del petróleo—, y las exportaciones no podrán crecer más rápido de lo que lo han hecho este año. No se trata de que todo eso pueda ser cambiado con medidas mágicas. Se trata de evitar la bancarrota, poniendo los parches que sólo un consenso político en las actuaciones económicas permiten poner. ■ CARLOS ELORDI.